



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA – CUNDINAMARCA

05 de agosto de 2020.

Proceso No. 2019-00212

Auto de Sustanciación Civil No. 0365.

Verificadas las documentales aportadas al proceso por parte de los apoderados demandados y en especial lo que tiene que ver con la escritura pública No. 1749 del 01 de noviembre de 2019, aclarada mediante escritura 0181 de 12 de febrero de 2020 (fls. 490 a 556), se pudo constatar que, la aquí demandada Sra. AURA ARDILA VIUDA DE PORRAS (AURA ARDILA BALCAZAR), falleció el día 14 de septiembre de 2008, razón por la cual este estrado judicial en aras de sanear posibles irregularidades que puedan conllevar a decretar la nulidad en el presente asunto;

Resuelve:

Vincular como demandados a los herederos determinados de la Sra. AURA ARDILA VIUDA DE PORRAS (AURA ARDILA BALCAZAR) (Q.E.P.D), Sres. HENRY ALBERTO PORRAS ARDILA, ALVARO PORRAS ARDILA, MARÍA ELENA PORRAS DE NARANJO, JORGE ENRIQUE PORRAS ARDILA, IVÁN PORRAS ARDILA y MARÍA DEL SOCORRO PASTRANA ARDILA, en su calidad de hijos de la causante y herederos indeterminados que se crean con derecho de intervenir en este asunto.

De igual manera, vincular a los herederos determinados del Sr. EVARISTO PORRAS ARDILA (Sres. JORGE ENRIQUE PORRAS OSUNA, ISABEL CRISTINA PORRAS OROZCO, CARLOS MAURICIO PORRAS OROZCO y LAURA ANDREA PORRAS OROZCO) y herederos indeterminados, quien era a su vez hijo de la aquí demandada y causante dentro del presente asunto.

Emplazar, en los términos previstos en el C. G. P. a los herederos determinados e indeterminados de la Sra. AURA ARDILA VIUDA DE PORRAS (AURA ARDILA BALCAZAR) (Q.E.P.D), que crean tener derechos sobre el inmueble a usucapir, para que concurren al proceso y que fueron vinculados, con excepción de la Sra. MARÍA DEL SOCORRO PASTRANA ARDILA, por cuanto ya se encuentra debidamente notificada del auto que admitió la presente demanda.

Dando cumplimiento al Decreto 806 de 2020, se realizara únicamente en el registro nacional de personas emplazadas sin necesidad de publicación en un medio escrito.

Surtido lo anterior, secretaria ingrese el proceso al Despacho para dar continuidad a lo que corresponda en el presente asunto.

NOTIFÍQUESE, (2)


OSCAR ANDRÉS MENJURA CUERVO
JUEZ

**JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
DEL TEQUENDAMA**

EL AUTO DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2020

SE NOTIFICO EN ESTADO No. 012

HOY 06 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 8:00 A.M.

Luis Alberto Cardozo
LUIS ALBERTO CARDOZO
SECRETARIO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PROMISCO MUJICIPAL
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA – CUNDINAMARCA

05 de agosto de 2020

Proceso No. 2019-00212

Auto de Sustanciación Civil No. 0366.

En atención a la solicitud elevada por el demandante (fls. 935 a 948), la misma se niega por improcedente, lo anterior por cuanto las actuaciones que surte la DIAN son ajenas a las que se siguen en este Despacho.

De igual manera, al verificar las pruebas documentales que se han arrimado a este estrado judicial, dentro de las mismas se puede evidenciar que, la diligencia a la cual el apoderado demandante solicitaba se oficiara con el fin de suspenderla, ya fue realizada por la DIAN, razón que en este momento conlleva a que se torne innecesario estudiar más a fondo su pretensión.

Se pone en conocimiento de las partes, la respuesta emitida por la Agencia Nacional de Tierras (fls. 949 y 950), así, como el acta de entrega allegada por el apoderado demandado (fls. 953 a 955)

NOTIFÍQUESE, (2)


OSCAR ANDRÉS MENJURA CUERVO
JUEZ

JUZGADO PROMISCO MUJICIPAL DE SAN ANTONIO
DEL TEQUENDAMA

EL AUTO DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2020

SE NOTIFICO EN ESTADO No. 012

HOY 06 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 8:00 A.M.


LUIS ALBERTO CARDOZO
SECRETARIO

935

SEÑOR

JUEZ PROMISCOU MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL
TEQUENDAMA, CUNDINAMARCA

PROCESO N° 2019-00212

República de Colombia	
Rama Judicial del Poder Público	
Juzgado Promiscuo Municipal	
San Antonio del Tequendama - Cund.	
Fecha Hoy: _____	
Hora: _____	
Quien Recibe: <u>Luis Cardozo</u>	
Folios: <u>14</u>	

JOHN JAIRO SOLEDAD CABRERA abogado titulado y en ejercicio, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, y en mi condición de apoderado de la parte demandante dentro del referido proceso. Con el debido respeto me dirijo a su señoría para hacerle la siguiente solicitud. Se oficie a la DIAN de GIRARDOT para que suspenda orden de entrega del predio el cual se hace referencia dentro de esta Litis, pues no tendría ningún sentido avanzar con este proceso si no se tiene la posesión del bien, el cual la oficina jurídica de la DIAN pretende entregar a un heredero de la parte demandada dentro del proceso ya mencionado, esta petición la solicito a su señoría teniendo en cuenta que mi prohijado presento acción constitucional (tutela) para atacar la orden de entrega emitida por la DIAN, y que no reconoció ningún derecho posesorio de mi poderdante y por el contrario violo toda norma contemplada en el código general del proceso, esta acción constitucional fue negada en su primer instancia por el Juzgado 2 Administrativo Del Circuito De Girardot, y numéricamente le correspondió el radicado 25307-33-33-002-2020-00049-00, y teniendo en cuenta que el Juez fallador en la parte motiva de su sentencia, manifiesta lo siguiente:

"Además no se debe dejarse de lado, el derecho que el accionante considera asistirle sobre el pluricitado bien inmueble, con ocasión de la posesión que, según ha afirmado, ejerció durante considerable lapso de forma pacífica y continua, es materia de definición por el juez natural (jurisdicción ordinaria –Juez Promiscuo Municipal de San Antonio de Tequendama-) en el proceso de pertenencia, cuya demanda figura inscrita en el folio de matrícula desde el 28 de octubre de 2019. Luego, es ese escenario judicial el idóneo y propicio para definir lo que también el actor pretende solventar en sede constitucional, suplica improcedente a razón del carácter residual de la acción instaurada."

De otra parte me permito manifestar que la acción constitucional impetrada por mi poderdante se le concedió la impugnación ante el TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, CUNDINAMARCA, esta solicitud.

Agradezco a su señoría, se despache favorablemente ante mi petición, esto con el fin de evitar un daño irreparable para los intereses de mi poderdante.

Me permito anexar copia del fallo del Juzgado 2 Administrativo Del Circuito De Girardot para un mayor conocimiento frente a mi petición.

Del señor Juez



JOHN JAIRO SOLEDAD CABRERA

C.C. No. 79752549

T P 310336 Consejo superior de la judicatura

Notificación: calle 68b 46ª- 74 sur, Bogotá

937

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE GIRARDOT

Girardot, once (11) de marzo de dos mil veinte (2020)

SENTENCIA NO:	64
RADICACIÓN:	25307-33-33-002-2020-00049-00
MEDIO DE CONTROL:	ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE:	LUIS ERBEY ARIZA MARTÍNEZ
ACCIONADO:	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN.

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el Despacho a resolver la presente acción de tutela dentro del término previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

2. ANTECEDENTES

2.1. PRETENSIONES.

Solicita la parte actora, por modo principal, “(...) se declare la nulidad de la diligencia realizada por la DIRECCIÓN DE COBRO COACTIVO DE LA DIAN DE GIRARDOT EL DÍA 07 de febrero de 2020 en la finca EL ENGAÑO de la vereda LAS ANGUSTIAS del municipio de SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA y que se identifica con la matrícula (sic) inmobiliaria 166-5503 (...)”; en este orden, pide se ordene a dicha entidad “(...) reversar la diligencia y se me devuelva la posición del predio en mención bien sea en visita realizada o en memorial allegado” / fl. 4 del expediente/.

2.2. DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO.

La parte solicitante de amparo endilga como presuntamente vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y del acceso a la administración de justicia / fl. 4 *ibidem*/.

2.3. HECHOS.

Relata el accionante / fls. 1-4 *ibidem*/ que es poseedor en forma real y material de manera quieta e ininterrumpida desde el año 2007 de la finca “El Engaño”, identificada con la matrícula inmobiliaria 166-5503 ubicada en la vereda ‘las Angustias’ del Municipio de San Antonio de Tequendama, Cundinamarca.

Señala que presentó demanda de pertenencia, por prescripción adquisitiva, en contra de la señora Aura Ardila Balcázar (q.e.p.d.), quien aparecía como propietaria del inmueble señalado.

Refiere que el nueve (9) de junio de 2009, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal de San Antonio del Tequendama para realizar una diligencia de embargo y secuestro sobre el inmueble mencionado, en virtud de un proceso ejecutivo que se adelantaba contra la propietaria, refiriendo que la diligencia fue atendida por él, habiéndosele dejado el inmueble en depósito sin que ejerciera oposición en dicha oportunidad, anotando que el secuestro nunca volvió al predio.

Indica que en el año 2015 fue visitado por una abogada de la DIAN que le informó que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá dejó el inmueble a disposición de la entidad con ocasión del embargo dentro del procedimiento de jurisdicción coactiva adelantado contra la dueña del inmueble.

Precisa que la DIAN nombró como secuestre a la señora Sandra Patricia Lozada Prada, de la empresa Gestiones Administrativas S.A.S. sin que le solicitara el depósito o ella se lo realizara. Aclara que dicha secuestre nunca ejerció la posesión sobre el inmueble.

Narra que en el mes de septiembre de 2019 recibió visita de la secuestre, en la que le solicita la entrega del predio, acordando un tiempo prudencial de sesenta o noventa (60 o 90) días que fue aceptado por la misma; posteriormente, la secuestre oficio a la DIAN señalando que el actor no iba a entregar el inmueble, deprecando así se comisionará al Juez o un Inspector de Policía para realizar la entrega.

Como consecuencia a lo anterior, prosigue, la DIAN fijó el siete (7) de febrero de 2020 para realizar la entrega del inmueble al apoderado judicial de uno de los herederos de la señora Aura Ardila Balcázar (q.e.p.d.); a dicha diligencia comparecieron la representante de la DIAN, la secuestre, el apoderado de uno de los herederos, la fuerza pública y un mandatario judicial del accionante.

Manifiesta que en dicha diligencia, con base en el artículo 308 del Código General del Proceso, se le exigió la entrega del bien inmueble, a lo que su apoderado, con sustento en el artículo siguiente del mencionado código, se opuso a la entrega exhibiendo el radicado 2019-00212 de la demanda de pertenencia que presentó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antonio del Tequendama y mencionando que en la entrada del inmueble se encuentra la valla que exige ese tipo de procesos.

Por último, señala que la funcionaria de la DIAN, desconociendo la prueba aportada, hace entrega del inmueble al heredero de la señora Aura Ardila Balcázar (q.e.p.d.).

2.4. ACTUACIÓN PROCESAL.

La solicitud de amparo fue formulada el veintiséis (26) de febrero de 2020 /fl. 48 *ibidem*/, mediante providencia del día siguiente este Despacho la inadmitió en razón a la ausencia de juramento, posteriormente el dos (2) de marzo del mismo año se admitió y ordenó a la parte accionada que en el término de 2 días rindiera informe detallado de los hechos de la demanda y allegara los antecedentes del cobro coactivo adelantado contra la señora Aura Ardila Balcázar (q.e.p.d.). Dicho libelo, sus anexos y el aludido auto fueron notificados conforme a la ley /fls. 56-57 *ibidem*/.

2.5. RESPUESTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA.

Con escrito del cinco (5) de marzo de 2020 /fls. 58-64 *ibidem*/, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN rindió informe.

Argumenta en síntesis que en ninguna de las etapas del proceso de cobro coactivo, ni en la práctica de las medidas cautelares, el accionante alegó la posesión del inmueble, y solo lo hizo en la diligencia de entrega; además, que las visitas realizadas por los funcionarios de la entidad y la secuestre fueron siempre atendidas por la señora Alcira Martínez de Ariza –madre del accionante-.

Menciona que, aunque el actor alega la posesión, nunca canceló el impuesto predial del inmueble, ni le hizo mejoras, arreglos o modificaciones.

Precisa que la entidad no es la llamada a reconocer o negar la pertenencia del accionante, solo se limitó a dar cumplimiento a la ley -Código General del Proceso y Estatuto Tributario- en las diligencias adelantadas.

Resalta que las obligaciones de la causante Aura Ardila Balcázar dentro del proceso de cobro coactivo fueron canceladas por sus herederos, aportando además el pago de los impuestos municipales del inmueble en discusión.

Refiere, se surtieron de las actuaciones procesales con observancia del debido proceso y las normas que en materia de medida cautelar trata el Código General del Proceso y el Estatuto Tributario, máxime considerando los derechos de los herederos de la causante que intervinieron en el proceso administrativo adelantado por la entidad.

En consecuencia solicita que se niegue el amparo solicitado, pues no se ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales alegados por el accionante.

3. CONSIDERACIONES

3.1. COMPETENCIA.

Este Despacho es competente para decidir sobre la presente Acción de Tutela, de conformidad con el Decreto Ley 2591 de 1991 (art. 37) en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, precepto 2.2.3.1.2.1., modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017.

3.2. PROBLEMA JURÍDICO

A fin de resolver el presente asunto, la atención del despacho se contrae a dilucidar el siguiente interrogante:

✦ *¿ES PROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA CONTROVERTIR LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA ADELANTADA POR LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, ASOCIADA A LA CULMINACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DECRETADA EN UN PROCESO DE COBRO COACTIVO?*

EN CASO AFIRMATIVO,

✦ *¿LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN VULNERÓ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS, AL NO RESOLVER FAVORABLEMENTE LA OPOSICIÓN REALIZADA A LA ENTREGA DE LA FINCA “EL ENGAÑO”, IDENTIFICADA CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA 66-5503?*

3.3. LA ACCIÓN DE TUTELA.

Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela es un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando, en virtud de la acción u omisión de cualquier autoridad pública (o de los particulares en los casos del artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991), resulten vulnerados o amenazados sin que exista al respecto otro medio de defensa judicial o, en la hipótesis que exista, dada la incierta idoneidad del medio de defensa, proceda cuando se requiera como mecanismo transitorio de inmediata aplicación, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable¹.

Se trata, entonces, de un instrumento jurídico confiado por la Constitución Política a las autoridades jurisdiccionales, cuya justificación y propósito consiste en brindar la posibilidad de acudir ante ellas sin mayores requerimientos formales y con la certeza de obtener oportuna decisión que brinde la protección requerida de manera directa e inmediata del Estado, con el fin de que cesen las actuaciones o situaciones de hecho que vulneren o amenacen derechos fundamentales.

En conclusión, para la viabilidad y prosperidad de la acción de tutela, se hace necesario que se lesione o amenace un derecho fundamental en cabeza de alguna persona, por la acción u omisión de una autoridad pública o un particular determinado por la ley, y que, para su protección, no exista otro mecanismo de defensa judicial, salvo que se promueva como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Por consiguiente, si el juez encuentra que se ha producido el efectivo quebranto o amenaza de un derecho fundamental, habrá de verificar si existe o no otro medio de defensa judicial para pedir su protección o restablecimiento. De ser así, deberá considerar su eficacia, frente a las específicas circunstancias de la afectación del mismo, toda vez que, en caso de ser ineficaz, deberá conceder la tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues esa condición será la que lo faculte para decidir de manera transitoria sobre el asunto puesto a su conocimiento.

3.4. ARGUMENTO CENTRAL.

El Juzgado adopta la siguiente tesis: no es procedente la acción de tutela para controvertir la actuación administrativa adelantada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, teniendo en cuenta que el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa idóneos y eficaces para debatir la posesión sobre el referido bien inmueble.

La anterior tesis, se fundamenta en las siguientes premisas fáctica y normativa.

¹ Sentencia T-001 de 1992 de la Corte Constitucional. Art. 6 (numeral 1), Decreto 2591 de 1991.

3.4.1. PREMISA FÁCTICA.

Obra en el expediente el siguiente material probatorio útil:

3.4.1.1. Oficio No. 1191 del dos (2) de junio de 2015 del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, con el cual informa a la DIAN que el proceso ejecutivo con acción mixta 2001-01235 terminó, y conforme al oficio No. 108201242-01767 del veintidós (22) de mayo de 2015 librado dentro del proceso administrativo de cobro coactivo de la DIAN contra Aura Ardila Vda. De Porras, se pone a disposición de la Administradora de Impuestos el remanente del embargo consistente en el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 166-5503, recalcando que dicho inmueble se encontraba embargado, secuestrado y avaluado / fl. 67 /.

3.4.1.2. Acta de verificación de inmueble del cuatro (4) de mayo de 2016 por parte de la DIAN de la que se destaca lo siguiente:

- i) Que la diligencia fue atendida por la señora Alcira Martínez de Ariza que manifestó “*Yo me encuentro viviendo aquí hace 9 años aproximadamente, esta finca se recibió por un negocio que hice con el Sr. ALVARO PORRAS ARDILA hijo de la señora Aura Ardila (...) los estoy esperando a ellos que regresen al país para realizar los documentos de escrituración de este predio por cuanto aun adeudamos un dinero (...)*”.
- ii) Que el secuestre le dejó el bien inmueble a la señora Alcira Martínez Ariza en depósito provisional y gratuito por el término de dos (2) meses.

/ fls. 75-76 *ibidem* /

3.4.1.3. Certificado de tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 166-5503 con fecha del 29 de enero de 2020, en la que, al paso de registrar a la señora Aura Ardila Viuda de Porras como única propietaria, se observa en las anotaciones (i) No. 11, del 12 de mayo del 2016, la medida cautelar consistente en embargo por jurisdicción coactiva, según Resolución N° 20160205000042 del 6 de mayo de 2016 de la DIAN; (ii) No. 12, del 3 de septiembre de 2019, la cancelación del embargo referido en la anotación precedente, según Resolución N° 20190231000938 del 27 de agosto de 2019 emanada de la DIAN; entretanto, (iii) en la anotación No. 13 del 28 de octubre de último, se registra medida cautelar con ocasión de la demanda promovida por el señor LUIS ERBEY ARIZA MARTÍNEZ en proceso de pertenencia, en virtud del Oficio emitido el 24 de octubre de 2019 por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antonio de Tequendama. Finalmente, (iv) en la anotación N° 14 del 16 de diciembre de 2019, se registró la cancelación del embargo otrora ordenado por el Juzgado 3° Civil del Circuito de Bogotá.

/ fls. 10-14 *ibidem* /.

- 3.4.1.4. Registro Civil de Defunción de la señora Aura Ardila Balcázar / fl. 85 *ibidem*.
- 3.4.1.5. Oficio de la DIAN No. 108201242-1582 del 2 de octubre de 2018, dirigido a la señora Alcira Martínez de Ariza con el cual se le comunica que la Sociedad Gestiones Administrativas S.A.S. fue designada como nuevo secuestre del mentado predio / fl. 92 *ibidem*.
- 3.4.1.6. Acta de diligencia de remoción de auxiliares del 23 de octubre de 2018 de la DIAN de la que se destaca lo siguiente:
- i) Que la diligencia fue atendida por la señora Alcira Martínez de Ariza que manifestó "*Voy a comunicarlos con mi hijo LUIS ERBEY ARIZ MARTINEZ telefónicamente al número 3142610893, quien manifiesta que asumirá la obligación de la deudora frente a la DIAN (...) que él tiene un negocio con don Álvaro (Heredero) y que prácticamente la propiedad es de él y por tanto sumirá la obligación (...)*".
 - ii) Que el secuestre le dejó a la señora Alcira Martínez Ariza el inmueble en depósito provisional y gratuito.
/ fls. 100-100A ibidem/
- 3.4.1.7. Con el Auto No. 198 del veintiséis (26) de julio de 2019, la DIAN resolvió lo siguiente:
- i) Aceptó la solicitud hecha por el apoderado judicial del heredero de la señora Aura Ardila Balcázar.
 - ii) Que es procedente dar aplicación al principio de favorabilidad en etapa de cobro.
 - iii) Aceptó el pago realizado equivalente al 50% de la sanción impuesta a la contribuyente Aura Ardila Balcázar.
 - iv) Declaró la terminación del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo contra la señora Aura Ardila Balcázar.
 - v) Se levantaron las medidas cautelares decretadas.
/ fls. 113-114 ibidem/
- 3.4.1.8. Con la Resolución No. 20190231000938 del 27 de agosto de 2019, la DIAN ordenó el desembargo del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 166-5503 propiedad de la deudora Aura Ardila Balcázar / fls. 116-117 *ibidem*.
- 3.4.1.9. Con el Auto del 28 de agosto de 2019, la DIAN ordenó al secuestre del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 166-5503, que entregue el bien al apoderado judicial del heredero y deudor solidario Álvaro Ardila Porras / fl. 119 *ibidem*.

- 3.4.1.10. Memorial del veinte (20) de septiembre de 2019 de la secuestre del pluricitado bien inmueble, dirigido a la DIAN, en el que informa que no se pudo hacer la entrega del mismo toda vez que los ocupantes se negaron a hacerlo y por ello solicita se libre despacho comisorio al alcalde local o al juez civil municipal correspondiente para llevar a cabo la diligencia de entrega /fl. 123 *ibidem*/.
- 3.4.1.11. Auto del veinte (20) de diciembre de 2019 por medio del cual la DIAN fija como fecha el día siete (7) de febrero de 2020 para la diligencia de entrega del bien secuestrado con matrícula inmobiliaria No. 166-5503. /fl. 142 *ibidem*/.
- 3.4.1.12. Acta de diligencia de entrega del bien inmueble secuestrado dentro del proceso de cobro coactivo adelantado contra Aura Ardila Balcázar del siete (7) de febrero de 2020 de la DIAN, de la que se destaca lo siguiente:
- i) Se hace un recuento de las actuaciones surtidas y se señala *"El Despacho deja constancia que de acuerdo a la lectura que se dio de las diligencias practicadas por la DIAN Seccional Girardot y la practicada por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antonio del Tequendama (...) se haya alegado posesión o prescripción adquisitiva de dominio por parte de los ocupantes, únicamente manifestaron que tenían un negocio con el heredero Álvaro Porras y siempre estuvieron en calidad de Depositarios provisionales y gratuitos."* /fl. 151/.
 - ii) Que con base al artículo 308 del CGP se ordenó a los ocupantes entregaran el inmueble, y el apoderado de estos, en virtud del artículo 309 *ibidem*, ejerció oposición argumentando que está en curso un proceso de pertenencia instaurado en el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antonio de Tequendama, plenamente identificado en la anotación No. 13 del 28 de octubre de 2019 en el certificado de tradición -el cual aportan en cinco (5) folios-.
 - iii) El Personero Municipal manifestó *"al momento se verifica que hasta este estado procesal se ha garantizado los derechos fundamentales de las partes tales como el debido proceso y el derecho a la defensa..."* /fl. 152/.
 - iv) Luego de un receso, se reanudó la diligencia para resolver de fondo la solicitud de oposición, para lo cual tuvo en cuenta lo siguiente: 1. Que es claro que el señor Luis Erbey Ariza Martínez y la señora Alcira Martínez de Ariza tenían conocimiento del proceso de cobro coactivo adelantado por la DIAN y el señor Álvaro Porras Ardila ha tenido conocimiento de la ocupación del inmueble; 2. En las diligencias adelantadas por la DIAN el señor Luis Erbey Ariza Martínez y la señora Alcira Martínez de Ariza siempre actuaron en calidad de depositarios provisionales gratuitos y reconociendo como dueño al señor Álvaro Porras Ardila al señalar un negocio de compraventa con éste; 3. El señor Luis Erbey Ariza Martínez y

la señora Alcira Martínez de Ariza, hasta la fecha y durante el proceso de cobro coactivo adelantado por la DIAN, no han aportado elementos de prueba de que han ejercido actos de señor y dueño sobre la propiedad; 4. Que la inscripción de la medida cautelar en el proceso de pertenencia fue inscrita con posterioridad al levantamiento de la medida cautelar de la DIAN y es competencia del Juez Promiscuo Municipal, por lo que se abstienen de hacer algún pronunciamiento al respecto; por lo anterior resolvió rechazar la oposición, negando la entrega simbólica del bien inmueble, ordenando al secuestre iniciar las acciones legales correspondientes para materializar la entrega del inmueble y por último, se le da plazo a los ocupantes para entregar el inmueble hasta las nueve de la mañana (9 a.m.) del treinta (30) de abril de 2020.

/ fls. 150-153 ibidem/.

3.4.2. PREMISA NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO

3.4.2.1. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS

Es un tema pacífico lo relacionado con la subsidiaridad de la tutela y en múltiples oportunidades el Alto Tribunal Constitucional ha señalado que²:

*“(…) conforme al artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un medio de protección de carácter residual y subsidiario, que puede utilizarse frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio idóneo de defensa de lo invocado, o existiéndolo, no resulte oportuno o se requiera acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable*³.

43. En desarrollo de lo anterior, esta Corporación ha señalado lo siguiente: *(i) si hubieren otras instancias judiciales que resultaren eficaces para alcanzar la protección que se reclama, el interesado debe acudir a ellas, antes de pretender el amparo por vía de tutela*⁴; y *(ii) la subsidiaridad implica agotar previamente los medios de defensa legalmente disponibles al efecto*⁵, pues la acción tutelar no puede desplazar los mecanismos judiciales específicos previstos en la correspondiente regulación común⁶.

44. Respecto al ámbito del derecho administrativo, la Corte ha establecido que *la acción de tutela es improcedente como medio principal para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos*⁷, toda vez que, *para*

² Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 2017. M.P ALBERTO ROJAS RÍOS.

³ Cita de cita: Ver Sentencias T-1085 de 2003, T-806 de 2004, T-397 de 2008, T-629 de 2009, T-338 de 2010, T-135 de 2015 y T-379 de 2015, entre muchas otras.

⁴ Cita de cita: Ver providencias T-135 de 2015 y T-379 de 2015, entre otras.

⁵ Cita de cita: Ver, entre muchos otros, los Fallos T-742 de 2002 y T-441 de 2003.

⁶ Cita de cita: Cfr. SU-622 de 2001, reiterada en la Sentencia T-135 de 2015.

⁷ Cita de cita: Sentencias T-514 de 2003, T-435 de 2005 y T-368 de 2008, reiteradas en la T-135 de 2015.

controvertir su legalidad está previsto el respectivo mecanismo ordinario en la jurisdicción de lo contencioso administrativo⁸, con el cual, desde la formulación de la demanda, como medida cautelar, se puede solicitar la suspensión de los efectos del acto que se pretenda cuestionar⁹.

45. No obstante lo consignado en precedencia, este Tribunal ha admitido que, en los casos en que se acredite un perjuicio irremediable, la solicitud de amparo se torna procedente de manera transitoria y habilita al juez de tutela para suspender la aplicación del acto administrativo¹⁰ u ordenar que el mismo no se ejecute¹¹, mientras se surte el correspondiente proceso común¹².

46. A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste debe reunir las siguientes características: "debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (...) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. (...) deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable."¹³

47. Con fundamento en lo expuesto, la Corte ha concluido que la acción de tutela, por regla general, resulta improcedente para dirimir conflictos que involucren derechos de rango legal, específicamente cuando se trata de controversias legales que surgen con ocasión a la expedición de actos administrativos, puesto que para la resolución de esta clase de asuntos, el legislador consagró los respectivos mecanismos judiciales ordinarios que deben emplearse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, este Tribunal también ha dicho que, cuando el accionante demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el amparo se torna procedente como mecanismo transitorio, hasta tanto la persona acuda,

⁸ Cita de cita: En fallo T-629 de 2008, esta Corte al referirse a la improcedencia general de la acción de tutela como mecanismo para controvertir los actos administrativos, sostuvo que "[c]iertamente, el interés que tiene la Corte en preservar el carácter subsidiario y residual de la tutela radica fundamentalmente en el respeto o independencia que tienen las diferentes jurisdicciones y la competencia exclusiva que éstas mismas tienen para resolver los conflictos propios de sus materias, en un claro afán de evitar la paulatina desarticulación de sus organismos y de asegurar el principio de seguridad jurídica". Reiterada en la Providencia T-135 de 2015.

⁹ Cita de cita: En cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos, la Corte en la Sentencia T-1231 de 2008 señaló: "Cuando se trata de solicitudes de amparo relacionadas con actos administrativos, esta Corporación ha precisado la impertinencia de la acción del amparo constitucional. Ello porque la vía para impugnar dichos actos es la contencioso administrativa y dado el carácter subsidiario de la tutela ésta resultaría improcedente, excepto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". Reiterada en el Fallo T-135 de 2015.

¹⁰ Cita de cita: Artículo 7º del Decreto 2591 de 1991.

¹¹ Cita de cita: Artículo 8º del Decreto 2591 de 1991.

¹² Cita de cita: Sentencia T-135 de 2015, entre otras.

¹³ Cita de cita: Providencia T-1316 de 2001, reiterada en el Fallo T-135 de 2015, entre muchos otros.

dentro de un término perentorio, al proceso común correspondiente¹⁴.
/Subrayado y negrilla del Despacho/

Corolario de lo anterior, es claro que como regla general la tutela es improcedente para dirimir conflictos respecto a actos administrativos y dicho medio constitucional solo se torna viable de manera transitoria cuando el accionante demuestra la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

3.4.2.2. INMEDIATEZ DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Respecto a este presupuesto la Corte Constitucional ha dicho que¹⁵:

“(...) de conformidad con el presupuesto de inmediatez, la acción de tutela debe ser utilizada en un término prudencial, esto es, con cierta proximidad y consecuencia a la ocurrencia de los hechos que se dicen violatorios y/o amenazantes de derechos fundamentales, pues es claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su razón de ser como mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo, lejos de ser razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de protección constitucional¹⁶.

49. En esa medida, para constatar el cumplimiento de dicho requisito de procedibilidad, el juez de tutela simplemente debe comprobar si resulta razonable el tiempo comprendido entre el día en que ocurrió o se conoció el hecho vulnerador y/o constitutivo de la amenaza de un derecho fundamental y, el día en que el derecho de acción se ejerció mediante la formulación de la acción de tutela¹⁷.” /Negrilla y subrayas del Despacho/

De lo anterior se extrae, que es imperativo para la procedencia de la acción de tutela se presente con proximidad y consecuencia de los hechos u omisiones que se alegan son violatorios de derechos fundamentales.

3.4.2.3. SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA.

Conforme al recaudo probatorio, se tiene establecido que el accionante no ejerció oposición a lo largo de la actuación administrativa adelantada por la DIAN –salvo en la diligencia de entrega del inmueble al heredero de la deudora–. Cabe rememorar inclusive que, desde el pretérito secuestro del bien ordenado por el Juzgado 3º Civil del Circuito de Bogotá el 9 de junio de 2009, el actor no se opuso en modo alguno a la diligencia /ver fls. 67A a 70/, mientras que, en relación con la medida cautelar ordenada por la DIAN en el procedimiento de cobro coactivo adelantado contra quien fungía como propietaria del bien, pese a que la entidad realizó diligencia de verificación del inmueble el 4 de mayo de 2016 –esto es, hace más de 3 años y 10 meses– en la cual la DIAN entregó la custodia del predio al secuestre –independientemente que este último lo haya entregado en depósito gratuito a una ocupante del mismo–, no se erigió por el actor ni por algún otro ocupante o poseedor del inmueble, oposición de ninguna

¹⁴ Cita de cita: Ver, entre otras, la Sentencia T-135 de 2015.

¹⁵ Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 2017. M.P ALBERTO ROJAS RÍOS.

¹⁶ Cita de cita: Al respecto, consultar, entre otras, la Providencia SU-961 de 1999.

¹⁷ Cita de cita: Fallo T-135 de 2015.

clase sobre la mentada entrega al secuestre ordenada por la DIAN, ni en ese momento ni después.

En estas condiciones, en primera medida, evidencia este juez constitucional que el solicitante de amparo ha tenido conocimiento desde pretérita oportunidad sobre la actuación adelantada por la DIAN, específicamente, en punto a la medida de embargo y secuestro ordenada sobre el bien que ocupa, cuyo conocimiento desde tiempo atrás tampoco controvertió en el *sub lite* al referir en la demanda que, desde el año 2015, estuvo enterado de las actuaciones dispuestas por la DIAN respecto al pluricitado bien /ver fl. 2 *supra*/y, aún así, ninguna actividad u oposición adujo haber formulado antes en aras de hacer valer, frente al trámite que presidía dicha entidad, la posesión que, dice, ha ejercido sobre el predio.

Siendo así, la acción aquí desplegada no se erige con idoneidad para dirimir en sede constitucional el debate promovido contra la DIAN, ligado a la referida posesión del bien, corolario de no satisfacerse el requisito de inmediatez, pues ha transcurrido tiempo considerable (alrededor de 4 años, como se dijo en líneas precedentes) entre la instauración de la acción y el momento en que el demandante conoció la entrega de la custodia del bien por la DIAN al secuestre, con las consabidas incidencias que ello pudiera suscitar en la posesión ejercida (independientemente que el secuestre hubiera o no cumplido en debida forma sus deberes).

Ahora, en gracia de discusión, de argüirse que la primera decisión adoptada por la DIAN en el procedimiento de cobro coactivo, de la cual hubo de notificarse debidamente el deprecante de amparo, fue la emitida en la diligencia del 7 de febrero de 2020 –asociada a la negativa de la oposición efectuada–, debe decirse que dicha declaración bien podría ser susceptible de control de legalidad en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instituido en el precepto 138 del CPACA¹⁸, en tanto definió en sede administrativa la oposición a la entrega (qué mejor, la oposición a la devolución) del predio al deudor que pagó su obligación (heredero de la deudora en el caso *sub lite*).

Y es que, nótese, la diligencia adelantada por la DIAN y que censura el actor, simplemente representa la concreción de otra decisión administrativa asociada a la culminación del procedimiento de cobro coactivo por pago total de la obligación (asumido por el heredero de la deudora) que, de suyo, conllevó el levantamiento de las medidas cautelares (embargo y secuestro) que pesaban sobre uno de los bienes de la deudora, este es, el distinguido en folio de matrícula inmobiliaria N° 166-5503 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Mesa. En tal entendimiento, si en sentir del actor, dicha determinación es, contraria a la ley, existe en el ordenamiento jurídico el mecanismo judicial ordinario, ya distinguido, que se perfilaría con idoneidad y eficacia para llevar a cabo el control jurisdiccional de la decisión dimanada de la entidad aquí vinculada por pasiva en punto a la no prosperidad de la oposición planteada en la diligencia del 7 de febrero último.

Y es que, debe resaltarse, se considera que dicho medio judicial sería eficaz, en tanto el promotor de la acción judicial ordinaria contaría con el catálogo de medidas cautelares contenido en la Ley 1437/11 que, al paso de prever la posibilidad de solicitar la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, también permite

¹⁸ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

948

deprecar la suspensión de un procedimiento o actuación administrativa (art. 230 numerales 3 y 2, respectivamente, del CPACA) conforme a los requisitos del canon 231 *idem*, al tiempo que podría formular la medida cautelar de urgencia de que trata el artículo 234 *ibidem*, previa configuración de los presupuestos previstos en las disposiciones normativas aplicables.

En este orden de exposición, a razón del carácter eminentemente subsidiario de este mecanismo constitucional y considerando que en lo absoluto la parte actora aludió o sugirió la causación de un perjuicio irremediable aun teniendo a disposición los antedichos mecanismos ordinarios de defensa judicial, se colige que esta acción de tutela adolece de improcedencia para definir el temario propuesto por el promotor de la acción.

Además, no debe dejarse de lado, el derecho que el accionante considera asistirle sobre el pluricitado bien inmueble, con ocasión de la posesión que, según ha afirmado, ejerció durante considerable lapso de forma pacífica y continua, es materia de definición por el juez natural (jurisdicción ordinaria –Juez Promiscuo Municipal de San Antonio de Tequendama–) en el proceso de pertenencia, cuya demanda figura inscrita en el folio de matrícula desde el 28 de octubre de 2019. Luego, es ese escenario judicial el idóneo y propicio para definir lo que también el actor pretende solventar en sede constitucional, súplica improcedente a razón del carácter residual de la acción instaurada.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLÁRESE IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional formulada por el señor LUIS ERBEY ARIZA MARTÍNEZ frente a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN.

SEGUNDO: NOTIFIQUESE este fallo a las partes intervinientes por el medio más expedito (art. 30 Decreto 2591/91), haciéndoles saber que el mismo es susceptible de impugnación, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de este fallo (art. 31 *ibidem*).

TERCERO: REMÍTASE este expediente a la Honorable Corte Constitucional para la eventual revisión de la sentencia, en caso que la misma no sea impugnada (art. 31 inciso 2º Decreto 2591/91).

NOTIFIQUESE



JUAN FELIPE CASTAÑO RODRÍGUEZ
JUEZ



El campo
es de todos

Minagricultura

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
Juzgado Promiscuo Municipal
San Antonio del Tequendama - Cund.
CORRESPONDENCIA
29 JUL 2020
Recibido Hoy :
Hora : **LUIS CERDAS**
Quien Recibe : **2**
Folios :
Barcode



Agencia
Nacional de
Tierras

06 de Mayo de 2020

Al responder cite este Nro.
20203100356821

Señores

JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL

Carrera 4 N° 4-14

jprmpalsatequendama@cendoj.ramajudicial.gov.co

San Antonio del Tequendama - Cundinamarca

Referencia:

Oficio	N° 0236 DEL 31 DE MARZO DE 2020
Proceso	PERTENENCIA RAD. 2019-00212
Radicado ANT	20206200260892 DEL 1 DE ABRIL DE 2020
Demandante	LUIS ERBEY ARIZA MARTÍNEZ
Predio	166-5503

Cordial saludo,

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) fue creada mediante el Decreto 2363 del 2015, para ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural, formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y, además, administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación. Entonces, la visión de la ANT es integral con respecto a las tierras rurales y, así, tiene a su cargo la solución de problemáticas generales relacionadas con la tenencia de la tierra.

Según lo anterior, y con el fin de atender el oficio de la referencia, se resalta que para esta Agencia resulta de fundamental importancia exponer los siguientes argumentos:

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-488 del 2014, advirtió que cuando se solicite la prescripción adquisitiva de bien inmueble rural contra personas indeterminadas o no obre antecedente registral, según las reglas establecidas legalmente, deberá presumirse la condición de baldío, y, por ende, tendrá que hacerse parte a la hoy ANT, para que concrete el derecho de defensa del posible predio baldío.

Lo anterior, dado el carácter imprescriptible que revisten los predios baldíos, entendidos como todas las tierras situadas dentro de los límites territoriales del país, que carecen de otro dueño, o que hubiesen regresado al dominio estatal, en virtud del artículo 675 del Código Civil. Entonces, se consideran baldíos de la Nación los predios con o sin cédula catastral que carecen de folio de matrícula inmobiliaria, antecedente registral, titulares de derechos real de dominio inscritos o aquellos que, teniendo un folio de matrícula inmobiliaria, no constituyeron derecho real de dominio sobre la misma.

Línea de Atención en Bogotá
(+57 1) 5185858, opción 0

Agencia Nacional de Tierras
Calle 43 No. 57 - 41 Bogotá, Colombia
Sede Servicio al Ciudadano
Carrera 13 No. 54-55 Piso 1 Torre SH
www.agenciadetierras.gov.co

Agencia Nacional de Tierras
Código Postal 111321
Sede Servicio al Ciudadano
Código Postal 111511

El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS



El campo
es de todos

Minagricultura



A su vez, el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 160 de 1994¹ dispone que la propiedad privada sobre la extensión territorial respectiva se prueba de dos maneras: *i) El título originario que no haya perdido vigencia, esto es, el acto mediante el cual el Estado se desprende del dominio en favor de los particulares, o ii) la cadena de transferencias del derecho del dominio, en los términos que se refieren en el artículo, es decir, anteriores a 1974.*

Conforme a lo anterior, la Circular No. 05 de la Dirección General de la ANT² precisó una interpretación para la aplicación del artículo 48 de la Ley 160 de 1994 en los procesos adelantados por la agencia, entre ellos a las solicitudes realizadas por las autoridades judiciales en los procesos de prescripción adquisitiva del dominio de los que trata la Ley 1561 de 2012 y Ley 1564 de 2012 para determinar la naturaleza jurídica de predios rurales; estableciendo como ruta la identificación de títulos debidamente registrados en los que conste transferencias de dominio³ anteriores al 05 de agosto de 1974.

Por tal razón la condición jurídica del predio en estudio queda sujeta a verificar si este salió válidamente de la esfera de dominio del Estado, con base en la información suministrada por el despacho. En este orden de ideas, al analizar los insumos del caso y la información consultada en la Ventanilla Única de Registro, se determinó lo siguiente:

Folio de matrícula inmobiliaria No.	166-5503
Fecha de apertura del folio	29-08-1978
Estado del folio	ACTIVO
Anotaciones	16
Folio matriz	N.R
Complementación	SI
Nombre del inmueble	N.R

¹ (...) A partir de la vigencia de la presente Ley, para acreditar propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial, se requiere como prueba el título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, o los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria. Lo dispuesto en el inciso anterior sobre prueba de la propiedad privada por medio de títulos debidamente inscritos con anterioridad a la presente Ley, no es aplicable respecto de terrenos no adjudicables, o que estén reservados, o destinados para cualquier servicio o uso público (...).

² Circular No. 05 del 29 de enero de 2018 de la Agencia Nacional de Tierras – Lineamiento para la interpretación y aplicación del artículo 48 de la Ley 160 de 1994 en lo referido a acreditación de propiedad privada sobre predios rurales.

³ Para hacer aplicable la figura transaccional de acreditación de la propiedad, las verificaciones de los asientos registrales deben ser anteriores al 5 de agosto de 1974 y tratándose de título originario expedido por el Estado, se entiende que el predio salió del dominio del mismo siempre que no haya perdido su eficacia legal.

Línea de Atención en Bogotá
(+57 1) 5185858, opción 0

Agencia Nacional de Tierras
Calle 43 No. 57 - 41 Bogotá, Colombia
Sede Servicio al Ciudadano
Carrera 13 No. 54-55 Piso 1 Torre SH
www.agenciadetierras.gov.co

Agencia Nacional de Tierras
Código Postal 111321

Sede Servicio al Ciudadano
Código Postal 111511



Dirección actual del inmueble	EL ENGAÑO
Vereda	LAS ANGUSTIAS
Municipio	SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA
Departamento	CUNDINAMARCA
Cédula catastral	N.R
Tipo de predio	RURAL

En lo que respecta a la naturaleza jurídica del predio objeto de estudio, en la anotación 1 se evidencia un acto jurídico de ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN COMUNIDAD contenido en la ESCRITURA N° 627 DEL 31 DE JUNIO DE 1975 DE LA NOTARIA DE LA MESA, debidamente registrada el 11 DE AGOSTO DE 1975, y calificado con el código registral 106; lo cual no es título y modo para transferir el derecho real de dominio y no prueba propiedad privada.

De acuerdo a lo anterior se procede al estudio de la complementación en la que se encuentra como antecedente registral:

- 1- EL INMUEBLE EN REFERENCIA, FUE ADQUIRIDO POR EL CAUSANTE JOSÉ MIGUEL VANEGAS EN COMÚN Y PROINDIVISO CON EFRAÍN VANEGAS POR MEDIO DE LA ESC.#2.615, CORRIDA EN LA NOTARIA 7. DE BOGOTÁ. EL 3 DE JULIO DE 1.952. POR ESC.# 27, CORRIDA EN LA NOTARIA DE LA MESA EL 22 DE ENERO DE 1.975 REGISTRADA EL 6 DE FEB. DEL MISMO AÑO, EN EL LIB. 1 TOMO 1 FL 183 # 15.


Así las cosas, toda vez que dicho título se encuentra acorde a una de las reglas de acreditación de **propiedad privada** del art. 48 de la Ley 160 de 1994, el predio objeto de la solicitud es de **naturaleza jurídica privada**.

Adicionalmente, se consultó el Sistema de Información de Tierras de la Entidad, cuya búsqueda arrojó como resultado que el inmueble de interés no está registrado en las bases de datos, respecto a los Procesos Administrativos Agrarios (clarificación de la propiedad, deslinde de tierras de la Nación, extinción del derecho de dominio y recuperación de baldíos). En ese sentido, se anexa el certificado correspondiente, expedido por la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la Nación.

Este análisis de naturaleza jurídica es resultado del estudio de la información asociada al Folio de Matrícula Inmobiliaria, consultada en la Ventanilla Única de Registro (VUR), y a los insumos registrales y notariales relacionados en el presente documento.

En los anteriores términos, damos por atendido el oficio de la referencia.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ VESGA
Subdirector de Seguridad Jurídica
Agencia Nacional de Tierras (ANT)
Proyectó: Paola Acosta, Abogada, convenio FAO-ANT
Revisó: Andrés Erazo, Abogado, convenio FAO-ANT
Anexos: Consulta al VUR y Certificado de predios de la ANT

Línea de Atención en Bogotá
(+57 1) 5185858, opción 0

Agencia Nacional de Tierras
Calle 43 No. 57 - 41 Bogotá, Colombia
Sede Servicio al Ciudadano
Carrera 13 No. 54-55 Piso 1 Torre SH
www.agenciadetierras.gov.co

Agencia Nacional de Tierras
Código Postal 111321

Sede Servicio al Ciudadano
Código Postal 111511

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

El presente documento contiene una firma digital válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la ley 527 de 1999.